

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00 Nicaragua: C\$ 10.00
El Salvador: US \$ 0.60 Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

Declaración del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

**!ALTO A LOS
ATAQUES DEL
IMPERIALISMO
CONTRA SIRIA!
OBAMA ATACA
MILITARMENTE
PARA NEGOCIAR
Y ESTRANGULAR
LA REVOLUCIÓN**



FECHAS: LA "INDEPENDENCIA" DE CENTROAMÉRICA

**HONDURAS.-
ALGORITMO: LOS
MAESTROS DEBEN
PASAR A
LA LUCHA**

**EL SALVADOR.-
!No a la
privatización del
agua!**

**GUATEMALA.-
Ineficacia de la
CICIG en lucha
contra impunidad**



GUATEMALA.- Hacia una radicalización de las organizaciones magisteriales



EL SALVADOR.- Los trabajadores públicos debemos luchar unidos



NICARAGUA.- La democracia de los empresarios

DEFENGAMOS LA MANO CRIMINAL DEL IMPERIALISMO EN SIRIA

Nuevamente el imperialismo norteamericano y europeo se preparan para atacar militarmente en Medio Oriente, en esta ocasión a Siria, país árabe estremecido por una revolución democrática iniciada en 2011 y que ha terminado en una sangrienta guerra civil que en un corto periodo ha dejado más de 100,000 muertos y más de 3 millones de refugiados en países vecinos como Turquía, Jordania e Irak.

Los inminentes ataques militares del imperialismo norteamericano y europeo pueden convertir la guerra civil siria en una guerra civil regional, en la que por lo menos estarán involucrados Turquía, Líbano, Irán e Israel.

Todas las contradicciones políticas, sociales y religiosas del Medio Oriente se concentran actualmente en la guerra civil siria.

Al comienzo de la guerra civil en Siria, el imperialismo norteamericano y europeo, estaban muy temerosos que se repitiera la experiencia de Libia, donde los bombardeos de la OTAN crearon un escudo protector y alentaron a las milicias populares a derrocar al gobierno de Gadafi. La desarticulación y desaparición del ejercito libio, creó una situación de caos revolucionario que todavía persiste en ese país, ya que el nuevo gobierno títere libio no controla vastas zonas que permanecen en manos de las diferentes milicias. La medicina salió peor que la enfermedad.

Por ello, la posición imperialista ha sido más cautelosa en Siria. Primero dejaron que el conflicto se prolongara, aplicando un boicot de armas a los grupos rebeldes, esperanzados que la presión diplomática lograra la renuncia de Bashar Al Assad y se iniciara así la transición pacífica y una reforma gradual y ordenada del régimen político. En esa perspectiva, Estados Unidos llegó a acuerdos preliminares con Rusia que se plasmaron en 2012 en el Plan de Paz de la ONU, impulsado por Kofi Anan, pero el proyecto de salida negociada fracasó porque el régimen dictatorial de Assad se negó a negociar con los rebeldes.

En la sobrevivencia del régimen de Assad ha incidido de manera decisiva el apoyo militar de Rusia y China, imperialismos emergentes que se disputan aliados,

mercados y zonas de influencia. Las recientes victorias militares del régimen de Assad obligaron al imperialismo norteamericano y europeo a modificar su actitud inicial. Se ha operado un giro y ahora necesitan intervenir en la guerra civil siria en un doble objetivo: en primer lugar para equilibrar las fuerzas militares en lucha, y en segundo lugar para aparecer como abanderados de la lucha por la democracia, garantizando un nexo político con la mayoría sunita de los países árabes.

Debido a la enorme resistencia de las masas de los países imperialistas, a nuevas aventuras militares como las de Irak y Afganistán, Estados Unidos y la Unión Europea han utilizado el dudoso argumento de la utilización de armas químicas por parte de Assad contra la población civil. Poco a poco Obama va juntando aliados para atacar militarmente al ejército sirio, lo que augura inminentes ataques en los próximos días o semanas.

Pero esta intervención militar directa no busca el derrocamiento de Assad (así lo ha dicho claramente Obama), ni el triunfo militar de los grupos rebeldes, tampoco la instauración de un gobierno democrático en Siria, sino la preservación de esa mortal maquinaria de guerra que es el ejército sirio, para imponer una negociación que termine con la guerra civil, liquidando a los grupos radicales que luchan por el triunfo militar de la revolución democrática. Está claro que el imperialismo mundial no quiere que se repita la experiencia de Libia, donde la dinámica de los acontecimientos desbordó los planes imperialistas.

Los socialistas centroamericanos llamamos a los trabajadores de Centroamérica y del mundo a movilizarse contra los inminentes ataques militares contra Siria. También llamamos a apoyar material y militarmente a los grupos rebeldes, para que estos sean reconocidos como fuerzas beligerantes con derecho a recibir armas, municiones, medicinas y alimentos. El principal enemigo de los trabajadores sirios es el actual plan imperialista de imponer una negociación con la presión de los ataques militares, para lograr la sobrevivencia del régimen de Assad con algún maquillaje democrático. ■



Impresión: 10 de Septiembre de 2013

No. 163

Primera quincena de Septiembre 2013

EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO es una publicación del PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA), fundado y reconstituido el día 4 de Abril del año 2009. Se publica en dos formatos: una versión digital que se actualiza diariamente (www.elsoca.org) y otra versión impresa que se publica quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial del PSOCA, sino la exclusiva responsabilidad de sus autores.

DIRECTOR: *Victoriano Sánchez*
CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún, Germán Aquino, Maximiliano Cavallera, Gerson de la Rosa, Eduardo Villalobos, José Manuel Flores Arguijo (in Memoriam)
AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org

Redacción: Secretariado Ejecutivo:

elsoca@elsoca.org

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org



ALGORITMO POLÍTICO = CORRELACIÓN LATINOAMERICANA: ¡MAGISTERIO HONDUREÑO DEBE LUCHAR!

Por Abril Yáñez

Colombia: docentes colombianos se unen al paro nacional del sector agro-minero, transporte, salud y social, contra el Tratado de Libre Comercio, el control de precios de insumos agrícolas, la condonación de deudas, el respeto por las zonas de vocación agrícola no minera y la baja de los precios del combustible, obteniendo como respuesta la represión violenta y agresiones físicas (noticias teleSUR. 23-08-2013).

Panamá: inició la huelga de los sindicatos de educación contra la privatización de la educación superior mediante la creación del Sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral por Decreto N°920 con represión policial y encarcelamiento (Leer artículo del PSOCA-Panamá El Socialista Centroamericano No.161).

México: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició protestas con bloqueo de las carreteras por la imposición de la evaluación periódica a los docentes como condicionante para conservar su permanencia, ascensos e incrementos salariales. Fueron reprimidos por 1700 agentes de policía (msn noticias. 24-08-2013).

Copia al carbón

En Honduras la lucha magisterial se ajusta fielmente a la lucha latinoamericana por una educación gratuita, pública y cuyos encargados en el Estado respeten los derechos laborales, con la coincidencia de tener el mismo hilo conductor: el mandato de los organismos internacionales y la sumisión eficaz de los gobernantes

latinoamericanos. Para cumplir sus designios estos acuden a la violación de los derechos humanos, represión física y psicológica y violencia extrema contra quienes se atreven a desafiarles en las calles.

La represión psicológica y laboral no cesa. Últimamente se anunció la instalación de relojes marcadores en los institutos de educación media más



grandes del país, ante lo cual la reacción del magisterio no se hizo esperar pues se considera que esta medida agrava la situación de nerviosismo y represión que viven los docentes; además, esto solamente delatará la realidad magisterial, pues muchos de ellos trabajan más de lo establecido, con lo cual estarán en todo el derecho de cobrar horas extras. La cuestión es, si el ministro tarda tanto en cancelar salarios ¿será capaz de pagar horas extras a cada docente que se retira de su centro de trabajo una, dos o hasta tres horas después de lo reglamentario? Esta medida aún no se implementa, pues acarrió una serie de cuestionamientos que incluyen cifras millonarias en la adquisición de los aparatos frente a las necesidades prioritarias de mobiliario, herramientas, maquinaria, equipo de laboratorio y de papelería de la que carecen todos los centros educativos de pre básica, básica y media en todo el país.

Estos gastos no pueden ser solventados debido a la falta de la Matrícula gratis y la indiferencia de la Secretaría de Educación, que traslapa la problemática educativa a conceptos de represión y autoritarismo contra los docentes.

Y ahora, al acercarse la festividad burguesa de la "independencia nacional", Marlon Escoto anunció en un comunicado que "ningún centro educativo público está autorizado a participar en desfiles alternos del 15 de septiembre sin la autorización de la Secretaría de Educación". Evidentemente, su autoritaria posición delata el poco respaldo que en los últimos años recibe el gobierno en los desfiles oficiales, pues la base magisterial de la mayoría de los institutos de segunda enseñanza opta por no desfilar o anexarse al desfile organizado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) exponiéndose a las sanciones que a diario anuncia el ministro en los medios de comunicación.

Ante esta nueva violación a la libre determinación de docentes, alumnos y padres y madres de familia, en la que se pone de manifiesto la excesiva arbitrariedad con la cual, a fuerza de amenazas, se pretende continuar arrinconando, humillando y sometiendo al sector educativo, ¿Cuál será la reacción de los docentes hondureños?

A tal acción, igual reacción

El magisterio debe elevar su nivel de conciencia sin prestarse como comparsa a las pretensiones de Marlon Escoto y el régimen Lobo-Hernández; los desfiles de septiembre no nos liberan del yugo del capitalismo, la emancipación debe iniciar en los mismos centros de trabajo sumándonos a la movilización del FNRP. El llamado es a la conciencia gremial; es tiempo de levantar la voz de protesta en unidad, firmes y con presteza tomando ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos: recomenzar la lucha, sin desmayar. ■

HIDROELÉCTRICA SANTA RITA: CON LAS MANOS LLENAS DE SANGRE

Por Leandro Flores

Aunque las formas de generar plusvalía, han cambiado a lo largo de la historia del capitalismo, ahora en Guatemala se nos presentan nuevos megaproyectos, en los que se repite el baño en sangre habitual, tanto de niños y mujeres.

La Hidro Santa Rita, como representante del capitalismo salvaje, ha cobrado la vida de dos niños de la comunidad Monte Olivo: David Estuardo Pacay Maaz, de 12 años, y Ageo Isaías Güitz Macz, 13. Después de que en el 2008 se autorizó la construcción de esta hidroeléctrica en el río Dolores en Alta Verapaz, en una finca llamada Xalaha Canguinic, una ONG llamada



Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CEDER, comenzó primero dando becas, escritorios, etc. Luego propuso que la hidroeléctrica es el desarrollo, dividiendo a la población; pero muchas comunidades han resistido heroicamente realizando asambleas con 20 de ellas presentes, oponiéndose a la construcción de la hidroeléctrica.

Aunque las luchas están a la orden del día y los pobladores al pie de cañón, el Estado, el ente "regulador" solo ha respondido con represiones. En el mes de febrero de 2012 la empresa puso una denuncia en el Ministerio Público contra 5 líderes de diversas comunidades; dicha denuncia fue ratificada en el mes de enero del año 2013 ante el juzgado de primera instancia penal de Cobán, quien en una audiencia entre la Jueza Ursula Pacay, el Ministerio Público y Abogados de la empresa, emitió orden de Captura contra los líderes comunitarios Esteban Caal, Jose Maria Guitz, Angel Tot, Mario

Ja y Alfredo Tiul quienes son acusados de plagio y secuestro, detención ilegal y robo agravado.

Con la excusa de que las comunidades habían pedido un destacamento militar en la comunidad Monte Olivo, hecho que nunca pudo ser probado, el ejército se instaló en el lugar. Ante esto los líderes y lideresas realizaron

una asamblea con 20 comunidades en la que manifestaron su rechazo al destacamento militar, elaborando un memorial para presentarlo al oficial a cargo de dicho destacamento. El día 18 de abril las 20 comunidades realizaron una manifestación frente al destacamento militar y se reunieron con el oficial a cargo, a quien entregaron el memorial de rechazo al destacamento; este oficial inmediatamente informó y consultó a sus superiores, los cuales le dieron la orden de retirarse de la comunidad con la tropa a su cargo, llevándose también los vehículos y equipo con que contaban.

Las empresas que han trabajado en la construcción de este proyecto han sido tanto nacionales como transnacionales, asesinando a personas de escasos recursos, y para esto han contratado a otra persona de escaso recursos. Por ello se debe juzgar al actor intelectual, del asesinato de los dos menores. Y se debe repugnar todo hecho similar y nunca

verse como algo normal.

Los niños fueron asesinados con la misma bala, por un guardia de seguridad privada de la hidroeléctrica, cuando buscaba al tío de estos dos infantes, el líder comunitario David Chen; el sicario, al no encontrarlo, disparó hiriendo a los dos niños de gravedad quienes murieron dos días después de ser hospitalizados en la capital. Los pobladores capturaron al guardia, llamado Guillermo Pacay Bol, al momento del ataque. Él confesó que la empresa le había pagado para asesinar a Chen. Aunque los líderes buscaron el diálogo, ni el Ministerio de Gobernación ni la PNC tuvieron la capacidad de llegar a la comunidad por falta de vehículos, hasta que después, agitados por el asesinato de los niños y por otros infiltrados de la hidroeléctrica, los pobladores lincharon a Guillermo Pacay, entregando su cuerpo cinco días después a las autoridades. Tiempo atrás David Chen había sufrido un intento de secuestro por parte de dos dizque agentes

de la PNC; cuando Chen pidió ver la orden de captura, no la tenían y estos dos individuos intentaron meterlo por la fuerza en un vehículo, cuando varias personas que trabajaban por ahí cerca detuvieron el secuestro y huyeron.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), nos solidarizamos con los padres y familiares de los dos niños, denunciamos tanto al Gobierno como a la empresa hidroeléctrica, que se han encargado de reprimir a las comunidades, y que no han respetado las consulta comunitarias. Hacemos un llamado a las 20 comunidades que continúen su heroica resistencia, y que no confíen más en CEDER, ya que está completamente de lado de Hidro Santa Rita, ni en ninguna organización que los quiera convencer de estar a favor de la construcción de la hidroeléctrica. ■

INEFICACIA DE LA CICIG EN LUCHA CONTRA IMPUNIDAD

Por Leonardo Ixim

La renuncia del costarricense Francisco Dall'Anese como comisario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) (el segundo a cargo después del español Calos Castresana desde la instalación de esta entidad adscrita a la Organización de las Naciones Unidas en 2007) se hace en el marco de denuncias contra la Cicig por presiones al máximo órgano de justicia, la Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso de la extradición a Estados Unidos del ex presidente Alfonso Portillo.

La tragedia del Estado de Guatemala ha sido la lógica natural de su funcionamiento, la inoperancia de las instancias estatales sobre todo las encargadas de aplicar la justicia, la acefalia de las instituciones y la cooptación de parte del ejército durante años del Estado mismo a partir de la preponderancia política y en materia de distribución de recursos financieros. Parte de esta lógica bonapartista quedó plasmada en el Estado Contrainsurgente, responsable de terrorismo contra la población.

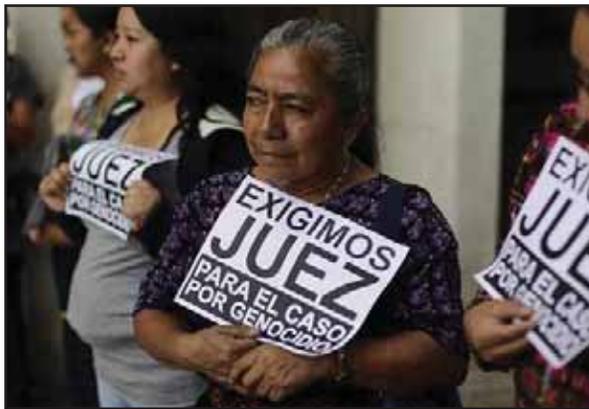
Esta situación se trató de reformar con los acuerdos de paz, primero de forma macro y ante el fracaso de esto, vía generación de instituciones de la paz. En ese sentido aparece la Cicig, como una forma de reducir los niveles de impunidad en los órganos de justicia, una de las herencias de la hipertrofia estatal sometida a los intereses de los grupos económicos y políticos del gran capital oligárquico y transnacional.

Pero esta hipertrofia es vital para los intereses de la reproducción material y acumulación de capital de la clase dominante. Por eso las tentativas reformistas de muchas organizaciones sociales, ong's y partidos de izquierda chocan contra el inmovilismo de la cosa pública, reflejo del Estado al servicio de la acumulación oligárquica y dependiente.

¿Qué le queda al entramado de las organizaciones sociales en este contexto de triunfo parcial de la contrainsurgencia? Refugiarse en la burocracia internacional

y en los compromisos supuestamente reales en favor de los derechos humanos del imperialismo. En ese sentido la Cicig fue una reivindicación necesaria que nosotros apoyamos, pero desde su inicio la extrema derecha cercenó los propósitos originales relacionados con el desmantelamiento de cuerpos clandestinos, utilizando un discurso nacionalista, apelando hipócritamente a la soberanía que siempre han vendido

Limitando las capacidades de Cicig



en lo relacionado al desmantelamiento de cuerpos paraestatales al servicio de grupos de poder económico, la primera administración se enfrascó exitosamente de desmantelar una mafia, la cercana al ex presidente Portillo, pero en claro servilismo a grupos del capital oligárquico, junto al MP terminó arrodillándose a las presiones gringas para la extradición de aquel.

La denuncia de que un alto funcionario de la Cicig presionó a la CC para que se diera la extradición de Portillo, cometiendo delito tanto este personero como los magistrados de la CC por no denunciarlo, es un reflejo de cómo la Cicig se enfrasca en una batalla que para la extrema derecha constituye un alivio. En el caso de la CC no se le puede eximir políticamente porque en este caso, como en el de la sentencia de genocidio a Ríos Montt y otros, su servilismo a la oligarquía es evidente.

La tarea pendiente de desmantelar los cuerpos clandestinos ha avanzado poco, casi nada. El hecho de que el

nuevo comisionado, un ex juez y ex fiscal del departamento de Antioquia, Colombia, Iván Velázquez, responsable de perseguir el entramado mafioso de Pablo Escobar y de desmantelar parte de una red de políticos y empresarios vinculada a grupos de extrema derecha, genera confianza en alguno grupos democráticos de la sociedad civil, pero no debemos confiar en este tipo de personas, solo debemos confiar en las acciones que puedan ejercer los trabajadores y el pueblo para terminar con la impunidad, propia del Estado capitalista. Lo poco que hemos avanzado en Guatemala se debe a la movilización popular, que la CICIG busca apagar y conducir a la institucionalidad actual.

Existen roces naturales entre el gobierno derechista y la CICIG, pero aun así acaba de prorrogar por dos años más su permanencia en Guatemala. Sin embargo, Otto Pérez declaró que los

dos últimos años serán para terminar de trasladar competencias al MP y salir del país. Esa decisión de aparente defensa de la soberanía en realidad busca evitar que se inicien nuevos casos de investigación que podrían vincular al presidente y a la vice Rosana Baldetti, sobre todo en casos malversación de fondos públicos, algo que podría ser aprovechado y alentado por la actual oposición.

Nosotros consideramos que no debemos confiar en la CICIG, los organismos populares deben ejercer la justicia directamente, como lo hacen algunas comunidades indígenas. La solución contra la impunidad, no se resuelve invitando a los organismos del imperialismo, ni suplantando lo que debe hacer el pueblo de manera directa. Debemos combatir la ilusión de creer que por medio de estas costosas burocracias internacionales se logrará la tan ansiada independencia en la aplicación de justicia. Estamos por la justicia popular, ejercida sabia y directamente por el pueblo. ■

LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DEBEMOS LUCHAR UNIDOS

Por Ignacio Fonseca

Los empleados públicos han continuado con sus luchas teniendo siempre como principales reivindicaciones mejoras salariales y de trabajo, y mayores asignaciones presupuestarias. Dichas luchas y demandas son legítimas a pesar de que el gobierno se aferra a desacreditarlas y a restarles toda legitimidad.

A pesar de que la crisis está afectando también a los trabajadores privados, en este sector son pocas o casi nulas las luchas que se han registrado, pero sigue siendo una meta la reactivación de las luchas de los trabajadores privados.

Unidad y lucha de docentes

Trabajadores administrativos y docentes del Ministerio de Educación organizados en Bases Magisteriales, Simeduco, Siandes, Sedesa, Atramec, Sigeteme, después de haber dado luchas de forma separada han anunciado que pactaron una alianza con la finalidad de dar la lucha de manera unida. Esta alianza es un gran paso dado por los trabajadores administrativos y docentes del Ministerio de Educación, ahora debe conformarse una coordinadora que organice y dirija las luchas de los docentes, a la cual deben unirse las demás organizaciones de docentes, ya que solo dando la lucha de forma unida se logrará que las demandas sean escuchadas y cumplidas. Además de las justas demandas por mejoras salariales y laborales deberá de mantenerse siempre la lucha por la mejora de la calidad y cobertura educativa en todos los niveles.

Además de lo anterior, Paz Zetino Gutiérrez secretario general de Bases Magisteriales, ha denunciado la falta de apertura del ministro de educación Franci Hasbún, y los problemas financieros que sufren los diferentes

centros educativos debido al retraso en los desembolsos, lo cual es una estrategia del gobierno debido a que "... la gran mayoría de escuelas ha recibido solo un primer desembolso correspondiente al presupuesto. Aún están pendientes de que el Mined les complete el monto. Además, como están a 60 días de terminar el año lectivo, en la medida que la cartera de Educación les entregue tarde el dinero es más complicado que logren invertirlo para cubrir las necesidades, debido a que eso conlleva muchos trámites burocráticos. A lo anterior se suma que las escuelas ya tienen encima el proceso de finiquitar los fondos que les da el gobierno y de allí que Gutiérrez argumenta que es una estrategia para que terminen devolviendo el dinero que les dé atrasado" (EDH, 02/9/2013). A lo anterior se agrega el bajo presupuesto que le continúan asignando a la educación, el cual se mantiene en el 3.37 % de Producto Interno Bruto (PIB); según las promesas de las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), en los cinco años debería ser del 5.5 % de Producto Interno Bruto.

Las organizaciones de docentes han denunciado también que son víctimas de la persecución sindical y de la

las bases deben luchar por que dicha unidad se mantenga y fortalezca. Las organizaciones sindicales están en el legítimo derecho de dar la lucha económica y política, pero las bases deben luchar contra las todas aquellas maniobras que buscan arrastrar a las organizaciones a intereses electoreros, más aun cuando esto implica la colaboración de clases y la claudicación a partidos que no representan ni defienden los intereses de la clase trabajadora. Ese fue el caso cuando las luchas libradas por sindicatos combativos como SIMEDUCO y BASES MAGISTERIALES fueron vistas con intereses políticos al ser ligadas al MNP liderado por Dagoberto Gutiérrez, quien termino claudiándole a la derecha emergente liderada por Tony Saca. Con lo anterior no se quiere decir que las organizaciones sindicales no deban dar la lucha por el poder político, sino que no deben aliarse a los partidos que representan los intereses de los diferentes sectores de la burguesía.

Además de la alianza entre las organizaciones de docentes se debe trabajar por la conformación de comités de lucha educativa, los cuales deben estar conformados por docentes, estudiantes y familiares.



Las luchas sindicales en el sector de justicia

Trabajadores organizados en el sindicato de la Procuraduría General de la República (SITRA-PGR) han mantenido acciones de protesta de cara a exigir mejoras en el presupuesto del 2014, exigiendo un aproximado de \$13 millones más para el presupuesto de la institución, fondos que servirían para mejorar la infraestructura de la PGR y sus unidades, así como para otorgación de un bono a los empleados. De cara a lo anterior Guillermo Aparicio manifestó que "...en su afán de hacerse escuchar, ayer la comisión de empleados visitaron las fracciones legislativas del PDC, Gana, FMLN, ARENA y PSD, entre otros. En todo los casos, a excepción del FMLN, todos los partidos están dispuestos a dar su apoyo a la PGR para obtener el incremento

violencia social que afecta a todo el país, a lo cual las autoridades de educación no han dado una respuesta favorable.

Esta alianza entre organizaciones de docentes no será bien vista por el gobierno, ya que significa una fortaleza para el sector magisterial; por lo tanto

presupuestario...” (EDH, 5/9/2013).

Más allá del aumento presupuestario, la dirección del FMLN debería ser quien canalice las demandas de las organizaciones de trabajadores, pero es todo lo contrario; son los representantes de la rancia derecha arenera quienes buscan abanderar las reivindicaciones de estos trabajadores y se rasgan las vestiduras. Así lo reflejan las declaraciones realizadas por la diputada

arenera Milena Calderón, quien olvidando que ellos fueron gobierno y que mantuvieron en la misma condición a dichas instituciones manifestó: “Comprendemos la situación de la PGR. Una institución que le sirve a la gente de menores recursos y que necesita ser protegida debería tener mayor presupuesto y que ya nos lo

había expresado la procuradora general anteriormente” (EDH, 5/9/2013). Pero luego reprocha el método de lucha. De igual manera, Sonia Cortez procuradora general de la República, está de acuerdo con las demandas pero no con el método, cuando en realidad estos son los métodos de lucha de la clase trabajadora.

Por su parte Carlos Cáceres, ministro de hacienda, pide hacer sacrificios a la procuradora y a trabajar con lo poco que tiene asignado. El ministro, como resultado de las mismas presiones de los empleados, deja en claro los problemas financieros del actual gobierno de Funes y del FMLN expresando: “Yo les he pedido a los ministros y presidentes de instituciones que por favor se ciñan al techo que les hemos dado. Ya ese techo nos va a generar algún tipo de dificultades financieras y estamos haciendo lo posible por ellos...” (EDH, 6/9/2013).

Por otra parte, en lo que va de

septiembre los empleados judiciales aglutinados en El Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (Sinejus 30 de junio) han protestado para exigir la destitución de la directora de la red de bibliotecas del Órgano Judicial, Marta Silvia Hernández, quien según declaraciones de Stanley Quinteros, secretario general de Sinejus: “... está abusando del poder que tiene y, cuando un empleado quiere defender

municipales, los trabajadores en todos los eventos electorales tienen que vivir con la preocupación de que pasara con su puesto de trabajo si llega otro partido, por lo tanto se debe exigir estabilidad laboral para todos los empleados municipales.

En esta ocasión las exigencias van dirigidas al gobierno municipal de Gloria Calderón Sol de Oñate, hermana del ex presidente Calderón Sol, quien

se desempeña como alcaldesa debido a que Norman Quijano tuvo que dejar el puesto de Alcalde para dedicarse a la campaña electoral. Esta señora además está siendo cuestionada debido a la sustracción de fondos FODES destinados a

infraestructura, para usarlos en gastos administrativos, lo cual no está permitido por la Ley. Quijano no ha podido probar la falsedad de esta acusación, lo que afecta para que le den el finiquito y pone en riesgo su inscripción como candidato a la presidencia. Esto llevó a diputados areneros hacer declaraciones bélicas como las de Mario Valiente quien manifestó “Volveremos a agarrar los fusiles”.



sus derechos, los pone a disposición de recursos humanos. Ella tiene años de estar aquí (en la Corte), pero ahora como que le han dicho que arrecie contra los empleados” (El Mundo, 6/9/2013). Hernández señaló también agresiones por parte de La seguridad de la CSJ. Se debe luchar contra las maniobras que buscan desarticular las organizaciones sindicales.

Trabajadores municipales exigen igualdad

El 5 de septiembre del presente año trabajadores de la alcaldía de San Salvador protestaron para exigir al gobierno municipal arenero mejoras salariales, ya que existen trabajadores que recién han sido contratados y como son activistas de la derecha arenera fueron beneficiados con mejores salarios que los que se desempeñaban con anterioridad, a pesar de tener la mismas funciones y responsabilidades. Independientemente del partido que llegue a los gobiernos

Unidad en la acción e independencia de clase

Los trabajadores deben continuar luchando y buscando la unidad en la acción además de mantener la independencia de clase; se debe exigir que se asignen más recursos al presupuesto de la república, sobre todo en aquellos aspectos sociales, debiendo asegurar un aumento general de salario para todos los trabajadores con excepción de los altos funcionarios. ■

EL BONAPARTISMO DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ Y LA ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO

Por Maximiliano Fuentes

El fin de semana pasado se eligió al Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto. A pesar de la aparente oposición de las distintas bancadas, los nacionalistas lograron su propósito con la complicidad de algunos diputados del partido liberal. Así, en horas de la madrugada del domingo 1 de septiembre se estaba juramentando a Oscar Chinchilla y a Rigoberto Cuéllar, a quienes se les tilda de ser amplios seguidores del presidencialista nacionalista Juan Orlando Hernández, y quienes fueron electos con 92 votos favorables, ocho de ellos provenientes del partido liberal.

Vicios en el proceso de elección

Durante el proceso de selección y elección de los candidatos por la Junta proponente, existieron un sinnúmero de denuncias de actos excluyentes y falta de transparencia del mismo. Sin embargo, la denuncia de mayor polémica fue la realizada por el exmagistrado Ivis Discua Barillas, quien cuestionó el proceso de elección tras retirarse y denunciar que la selección de ambos cargos ya había sido arreglada por la cúpula del Partido Nacional desde la noche anterior.

Las declaraciones de Discua dejaron en evidencia los arreglos por debajo de la mesa dentro de su propio partido y el matiz legal que se le pretendió dar al proceso en las audiencias públicas con preguntas superficiales y sin cuestionamientos. Sin embargo, no logra comprenderse el disgusto de Ivis Discua, ya que de la misma manera se ha venido nombrando funcionarios, directores y secretarios de Estado en la actual administración.

En los días anteriores a la elección de los fiscales por parte del Congreso Nacional se habían retirado del

proceso algunos miembros de la Junta Proponente, entre ellos: el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, así mismo la señora Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos. Resulta evidente inferir los motivos de estas contradicciones, dado que diversos miembros del partido pretendían ocupar este cargo. ¿Pero por qué existía un amplio interés de Juan Orlando Hernández y la cúpula del partido nacional de elegir a estos fiscales dentro de esta coyuntura? La respuesta podría ser obvia, sin embargo existe cierta complejidad que requiere de un



Juramentación del nuevo Fiscal y su Adjunto

análisis de la situación nacional y de la lucha de clases.

El propósito de la elección del Fiscal

En ediciones anteriores de El Socialista Centroamericano, explicamos la necesidad del régimen de elegir a un nuevo fiscal para asegurar el control de la mayoría de instituciones del Estado. Ante un eventual triunfo electoral del partido Libertad y Refundación LIBRE, se requiere aunar esfuerzos y asegurar el mayor control del Estado y de sus instituciones.

Eso por varias razones: la primera, para frenar todo intento de reformar la constitución o emprender acciones desde el Ejecutivo que comprometan

los intereses de la oligarquía y de la burguesía hondureña; basta recordar el papel de Luis Rubí en la destitución de Manuel Zelaya Rosales del poder el 28 de junio de 2009. Por otro lado, no podría descartarse la unidad total de todas las instituciones del Estado ante un posible fraude electoral por parte del candidato del partido nacional Juan Orlando Hernández, quien ha logrado concentrar un enorme poder manipulando y comprando voluntades con grandes sumas de dinero provenientes de las arcas del Estado. Por tal razón, la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio público persigue un interés estrictamente político, dado que solo desde esta instancia se logrará un control casi total de la institucionalidad y desde allí seguir favoreciendo a las grandes corporaciones y los negocios que se tejen de forma directa con el Estado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) estamos absolutamente claros de que estos movimientos en la superestructura estatal persiguen el objetivo de consolidar los proyectos políticos y económicos de los grupos élites para continuar perpetuándose como clase dominante y gozar de amplios privilegios sobre la base de la miseria de los trabajadores y campesinos. Por eso hacemos un llamado a las organizaciones obreras, gremiales, sindicales, campesinas y populares a no confiarse de la institucionalidad burguesa.

Solo la movilización y la independencia de clase nos conducirán a la constitución de un Estado al servicio de los trabajadores y no de las clases dominantes. Hoy por hoy, el poder del Estado se concentra en el sector que encabeza Juan Orlando Hernández, franco enemigo de los intereses populares. Para combatir sus planes de miseria de explotación se requiere de la más amplia unidad de los trabajadores y la recuperación de los métodos obreros de lucha como la movilización y la huelga general. ■

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS ESTÁ EN PRECARIEDAD

Por Justo Severo Izquierdo

Unos 20 mil trabajadores estatales sufrieron la suspensión de la atención médica esta semana por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), porque el gobierno no ha cumplido con el compromiso de honrar la deuda que sostiene con esta institución. Hasta el día jueves se reanudó el servicio por el acuerdo a que llegaron las autoridades del IHSS con las 19 instituciones estatales que se encuentran en mora con el Seguro Social; mientras no cumplan con los plazos acordados, nuevamente aplicarán las medidas de presión.

La deuda de los sectores privado y estatal agudiza la crisis en el IHSS

Según los datos estimados por Mario Zelaya, director ejecutivo del IHSS, el sector privado le adeuda a la institución una suma de 400 millones de lempiras, mientras que el gobierno le debe 168 millones. De estas sumas sólo han ingresado dos millones por parte de la empresa privada, a quienes se les benefició con un decreto de amnistía, para darles oportunidad de saldar la enorme deuda que han contraído cerca de 7,500 empresas (El Heraldo, 5/9/13).

El Seguro Social se encuentra en este momento enfrentando una crisis económica, a tal punto que hay desabastecimiento de medicamentos, no existen los insumos necesarios para atender las necesidades de los afiliados, los pacientes se ven en la necesidad de comprar insumos y medicamentos fuera del centro asistencial, con la enorme preocupación de afectar más su raquítica economía. El gobierno ha sido incapaz de solventar una de las necesidades más elementales de una nación, la salud. El caso es grave en el sector salud, los demás hospitales públicos se encuentran desabastecidos, la demanda de asistencia médica cada día se multiplica y no se cuenta con los centros equipados ni con el mantenimiento adecuado que

para que tengan la capacidad de alojar y atender a los miles de hondureños que llegan en demanda de ayuda.



Los empleados de la salud se encuentran en paro exigiendo el pago y otros derechos que se les han suspendido por meses. Ante toda esta realidad, a los trabajadores afiliados al IHSS se les presenta como única opción ser atendidos en este instituto, ya que la crisis que agobia al país, no permite pagar centros asistenciales privados. Pero por lo acontecido en esta semana, a los hondureños afiliados al Seguro Social, se les diluirá la única opción y las esperanzas de ser atendido en este centro asistencial. Porfirio Lobo, una vez más en su anhelo de "pegar una" fracasa en sus estrategias de gobierno. La maniobra, de sugerir que los cobros al Seguro Social se realicen de forma descentralizada y que cada secretaría de Estado pague el total de sus empleados, no ha tenido los resultados deseados. Las deducciones a los trabajadores por años han sido desviadas tanto por instituciones privadas como públicas, fondos que utilizan para cubrir otras necesidades que favorecen a la empresa y no para el bienestar de los empleados.

Los trabajadores pagan los

platos rotos

La medida impuesta por el IHSS es inadecuada, partiendo del hecho que todos los empleados cumplen con la cuota respectiva al deducírseles mes a mes en la planilla; por lo tanto, no pueden correr el riesgo de ser desatendidos en los momentos en que más lo necesitan. Esto no solo afecta a los afiliados directos, sino que a los familiares de los mismos que también reciben atención en este

centro asistencial. La culpa es del Estado y de la empresa privada, no del trabajador. Es más, a quienes se les tiene que deducir toda la responsabilidad y deben ser castigados con todo el peso de la ley, es a todos aquellos que están al frente de estas instituciones, por poner en riesgo la vida de miles de trabajadores. El derecho a la seguridad social es un derecho humano, reconocido en la Constitución de la República, en leyes secundarias y en tratados internacionales.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denuncia al gobierno por su negligencia al poner en riesgo la salud de todos los afiliados al IHSS. Se le pide que investigue hacia dónde van a parar estos fondos y se castigue a los responsables del desvío de los mismos. Todos los centros asistenciales públicos deben ser financiados por el Estado. Por lo tanto, la salud debe ser gratis para todos los hondureños y hondureñas. Los trabajadores del IHSS deben llamar a movilización nacional a todos los trabajadores para exigir la transferencia inmediata de las deducciones hechas a los cotizantes. ■

!ALTO A LOS ATAQUES DEL IMPERIALISMO CONTRA SIRIA! LA ESTRATEGIA DE OBAMA: ATAQUES MILITARES PARA NEGOCIAR Y ESTRANGULAR LA REVOLUCIÓN

Publicamos un resumen de la reciente Declaración del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) sobre las amenazas imperialistas y la guerra civil en Siria. La versión completa pueden leerla en el sitio: www.elsoca.org

Siria, al igual que otros países del Medio Oriente, forman parte de la gran nación árabe, artificialmente dividida por los imperios coloniales en múltiples Estados. A pesar de la fragmentación, todos los países árabes tienen profundos vasos comunicantes, por ello la caída del régimen dictatorial de Mubarak en Egipto y el derrocamiento de Gadafi en Libia, aceleraron la crisis del régimen dinástico en Siria.

Siria ha jugado un rol importante en las guerras de Medio Oriente, especialmente en Líbano, pequeño país vecino, creado en 1920 por el colonialismo francés, que originalmente era parte de la gran Siria. La posición geopolítica de Siria (tiene fronteras con Israel, Líbano, Irak, Turquía y Jordania, y se encuentra muy cerca de Irán, la principal potencia regional), y los resabios nacionalistas de la dinastía Assad, han creado periódicamente roces o conflictos con el imperialismo.

1.- Diferentes momentos de la rebelión popular

La rebelión popular en Siria ha pasado por varios momentos. Las manifestaciones pacíficas de protesta del año 2011 fueron brutalmente reprimidas, convirtiéndose rápidamente en insurrección y más adelante en una guerra de guerrillas, que se defiende con las uñas de las incesantes masacres y del genocidio, hasta convertirse en una abierta guerra civil, en una lucha a muerte por el poder político.

El temor al triunfo de la insurrección popular obligó al imperialismo norteamericano y europeo, junto a las



burguesías árabes, a buscar salidas negociadas a la guerra civil, aceptando incluso la sobrevivencia del régimen dictatorial, bajo el compromiso de realizar ciertas reformas políticas.

Este profundo temor a la revolución popular contribuyó a la sobrevivencia del régimen y que éste superara parcialmente el aislamiento internacional, alargando la guerra civil y provocando más de 100,000 muertos y tres millones de refugiados en los países vecinos.

Bashar Al Assad aprovechó el impasse del año 2012 y el arribo de la Misión de Observadores de la ONU, para reconquistar el terreno perdido, intensificando la represión contra los civiles. Las masacres en Siria han contado con la complicidad de todas las potencias imperialistas, que hipócritamente derraman lágrimas de cocodrilo por los civiles muertos, pero han hecho muy poco por ayudar a los milicianos. Es más, han permitido deliberadamente que el ejército sirio golpee y debilite la insurrección popular.

Los grupos insurgentes pelean con escaso armamento. Solos los grupos salafistas son apoyados militarmente desde Qatar y Arabia Saudita, dos reaccionarios reinos sunitas que son enemigos mortales de Irán y del régimen de Bachar Al Assad. Tenemos, pues, dentro de la guerra civil siria una refracción del conflicto religioso entre sunitas y chiitas.

2.- Etnias y guerras civiles con banderas religiosas

Siria es un país heterogéneo desde el punto de vista étnico. Aunque el 90% de los 22 millones de sirios son árabes, existen también minorías kurdas, armenias y turcas. En el plano religioso, el 87% de la población es musulmana. El 74% pertenece a la rama suní, mientras que la chií, la alauí (que es una rama del chiismo) y la ismailí, suman el 13% del total. Los cristianos son el 10% y los drusos (una secta de origen islámico) un 3%.

Esta abigarrada composición étnica y religiosa crea una tremenda división dentro del movimiento de masas, que oculta las abismales contradicciones sociales.

Como una herencia del colonialismo francés, desde la independencia de Siria en 1946, la privilegiada minoría alauita domina el país con mano de hierro. El clan de los Assad pertenece a los alauitas, de ahí su profunda identificación con los ayatolas de Irán y con las milicias chiitas de Hezbolah en Líbano. Las minorías drusas y cristianas apoyan al régimen dominado por los alauitas, que alardea de laico.

Siria, Líbano e Irán forman parte de los países de Medio Oriente que tienen fuertes contradicciones con el imperialismo, y que coincidentemente son dominados por el chiismo, corriente minoritaria del Islam. Por ello, la guerra civil en Siria ha adquirido la engañosa forma de un enfrentamiento sectario o religioso, como ocurre en la vecina Irak. Pero las dinámicas son diferentes. En Siria la mayoría sunita se rebela contra la opresión política y social de la minoría alauita y chiita. En Irak la otrora dominante minoría sunita se enfrenta a la mayoría chiita, con el objetivo de recuperar sus privilegios.

Esta confrontación sectaria o fratricida entre chiitas y sunitas es alentada por el imperialismo mundial, como un mecanismo de división y atomización de la nación árabe. Incluso, el régimen de

Assad en un afán de ganar adeptos en los países occidentales, enarbola las banderas del laicismo contra el fundamentalismo islámico de los grupos sunitas más radicales. Pero, en realidad, detrás de las diferencias religiosas está la lucha por el poder y el control del aparato del Estado, está la insurrección de las masas contra el aparato del Estado burgués.

3.- Las "khatibas": organismos de poder popular

Las milicias populares o "khatibas" en Siria han proliferado como mecanismo de autodefensa de los jóvenes, ante la brutal represión desatada por el régimen dictatorial de Bashar Al Assad.

A diferencia del ejército regular de Al Assad, un cuerpo bien armado, bien entrenado y con una férrea disciplina, las "kathibas" son espontáneas, desorganizadas y mal apertrechadas. La única ventaja que tienen en el campo de batalla, es la masividad de sus tropas, pero su dispersión por todo el territorio nacional no permite concentrarlas en batallas semi regulares o regulares. Las "kathibas" han llegado incluso a apoderarse de tanques, producto de las desertiones o del asalto directo, pero ello no les permite enfrentar al ejército regular en batallas de gran envergadura, como se demostró en la retirada rebelde en la ciudad de Alepo, sencillamente porque no podía combatir contra una fuerza militar superior.

Las "kathibas" mantienen el orden en los barrios liberados, evitando los saqueos, manteniendo el control de los precios. La policía y los tribunales han desaparecido en los barrios insurrectos, y las "kathibas" ejercen el rol de tribunales de justicia y de cuidadores del orden público, en medio del caos de los bombardeos y de la guerra civil. Las "kathibas" son organismos embrionarios de doble poder, son el embrión de un nuevo Estado.

El debilitamiento del control dictatorial del gobierno de Assad en los barrios y territorios liberados, ha permitido el surgimiento de comités y de milicias populares, que ejercen funciones de doble poder. Pero este proceso de auto

organización no es lineal ni ascendente, está influenciado por las oscilaciones de la guerra civil.

4.- La unificación de la oposición burguesa en Siria

Dentro de la oposición siria se distinguen dos ramas: una política, compuesta por el Consejo Nacional Sirio (CNS) y el Comité Nacional por el Cambio Democrático (CNCD), y otra militar compuesta por dos sectores; el Ejército Libre de Siria (ELS), que es un aparato militar alimentado por las burguesías árabes y el imperialismo, y las milicias populares que han nacido y proliferado con la insurrección.

Después de muchos roces y diferencias, presionados por la Liga Árabe a finales del 2011, la oposición burguesa inició un proceso de unificación bajo la hegemonía del CNS y en estrecha alianza con el ELS.

Con la negativa de dotar armas al bando rebelde inmediatamente después del levantamiento popular en 2011, el imperialismo norteamericano y europeo, con un cínico cálculo político, prolongaron la guerra civil y los sufrimientos del



pueblo sirio, obteniendo a la larga la domesticación de la mayor parte de las direcciones que luchan contra Bashar Al Assad. Pero este control político sobre la oposición y la conducción militar del bando rebelde no ha significado un vuelco de apoyo militar del imperialismo a favor de estos, sino que la ayuda militar la siguen manteniendo a cuenta gotas – autorizada en Junio del 2013 por Obama. Este chantaje sigue siendo un arma formidable para arrodillar y subordinar la lucha rebelde a los objetivos estratégicos del imperialismo

norteamericano y europeo.

5. Las guerrillas y los grupos fundamentalistas islámicos

El Ejército Libre de Siria (ELS) es la principal guerrilla que tiene su retaguardia de operaciones en el territorio de Turquía. Ante la ausencia de una dirección obrera revolucionaria reconocida por el movimiento de masas, el ESL es la guerrilla que más ha aprovechado la proliferación de milicias populares, encuadrándolas y disciplinándolas dentro de su estructura militar verticalista, pero incluso en este proceso han surgido las naturales contradicciones entre quienes dirigen la lucha militar desde el exterior, y quienes están en las trincheras, dentro de los barrios y territorios liberados. Las milicias se resisten a ser controladas, aquí es donde el condicionamiento de la ayuda militar juega a favor de los planes imperialistas.

También combaten grupos fundamentalistas islámicos como: el Frente Al Nusra, Al Sham, Estado Islámico de Irak y Levante. Estos grupos fundamentalistas islámicos constituyen el ala más radical del amplio movimiento anti Bachar, y aunque todavía son minoritarios, ostentan

una ideología religiosa medieval y reaccionaria. Pese a su antioccidentalismo y anti secularismo, representan los intereses de la burguesa sunnita qatari que es pieza clave en el engranaje de la política imperialista.

Estos grupos han concentrado sus ataques contra las comunidades alauíes, así como a cristianos y sunnitas que no comulgan con ellos, priorizando las diferencias sectarias y religiosas por encima de la urgente lucha militar contra el enemigo común. El régimen de Assad presenta este tipo de acciones militares como parte de una estrategia de grupos terroristas vinculados a Al Qaeda, que se preparan para tomar el control de Siria y Medio Oriente. De esta manera, Assad pretende asustar a las potencias occidentales y obtener su neutralidad para ganar la guerra civil.

(...) 8. El giro de la guerra civil y las victorias militares del régimen

Al comienzo de la guerra civil en

2011, la insurrección popular provocó que el régimen perdiera territorios, que ya no podía controlar. Por ello, y como una correcta táctica militar, el ejército sirio concentró sus tropas en las zonas costeras, para recuperar fuerzas, y proceder a la contraofensiva militar sobre los principales bastiones rebeldes, como ocurrió en la batalla de Aleppo.

Después de dos años de guerra civil, mientras los rebeldes carecen de armas, medicinas, alimentos y apoyo económico, las informaciones disponibles indican que el régimen ha comenzado a recuperar la iniciativa en el terreno militar, debido a que las milicias populares están fragmentadas, no han logrado construir un ejército regular, y porque la política del imperialismo y de las burguesías árabes no es construir un poderoso ejército revolucionario, sino obligar a Bachar Al Assad a abandonar el poder.

El régimen sirio reconquistó en junio del 2013, con la ayuda de la experimentada milicia de Hezbolá, la estratégica ciudad de Qusair. Esta victoria militar le permitió unir Damasco con esa zona alauí en el noroeste de Siria, que había sido cercada por las milicias. Con este triunfo militar, Asad se garantizó el control con la frontera de Líbano, obtener una retaguardia segura que le permite abastecerse de armas y obtener refuerzos de combatientes de las milicias de Hezbolá. Este giro en el campo de batalla fue el campanazo de alerta en el campo imperialista. Casi inmediatamente después de la reconquista de Qusair, la administración de Obama, que había estado muy cautelosa, anunció que proporcionaría armamento y apoyo material a las milicias sirias.

9.- El imperialismo también se reacomoda

Y aquí es donde observamos un giro en la política del imperialismo en torno a la guerra civil en Siria. Primero intentó negociar un acuerdo global con Rusia y China, que incluyera la sobrevivencia del régimen de Bachar Al Assad, apoyando una salida negociada con el Plan de Paz de la ONU, pero esta opción fracasó por la obcecación del régimen y por la posición hostil de Rusia y China.

Después, en la medida en que el régimen de Assad recupera terreno militar, el imperialismo se muestra preocupado que una victoria militar del ejército sirio, arruine la estrategia de poner fin a la guerra

civil a través de una negociación política. La sobrevivencia del régimen sirio significaría un fortalecimiento del eje Siria-Líbano-Irán, que estropearía los planes del imperialismo y cambiaría dramáticamente la correlación de fuerzas en Medio Oriente, debilitando al sionismo en Israel y al gobierno de Turquía, considerado el ejemplo de democracia islámica.

Contra su voluntad y planes anteriores, presionado por los recientes triunfos militares del ejército sirio, el imperialismo se ve forzado a intervenir militarmente para evitar que Assad gane la guerra civil. Una derrota o aplastamiento de la oposición siria, ahora ganada a la política del imperialismo, significaría la bancarrota de la política imperialista en Medio Oriente. Por eso Obama amenaza con represalias militares directas sobre Siria. El imperialismo nunca interviene para apoyar revoluciones, sino para ahogarlas y sepultarlas, sobre todo en el caso de Siria donde la rebelión popular se muestra incontenible a pesar del escaso armamento.

10.- La experiencia de Libia

Lo que está ocurriendo Siria es similar, con las diferencias del caso, a lo que ocurrió en Libia. Recordemos que en 2011, el imperialismo impuso un ultimátum "amistoso" a Gadafi, su antiguo aliado. Cuando éste se resistió a abandonar los privilegios del poder, y se produjo la insurrección en Bengasi, entonces el imperialismo cambió de posición: apoyó tímidamente a los rebeldes para incidir políticamente en los acontecimientos, inició bombardeos para evitar que el ejército de Gadafi aplastara los bastiones rebeldes, para equilibrar fuerzas y forzar las negociaciones. Para aplicar una política de negociación, necesita mantener con vida la rebelión, pero bajo su control.

En la agresión contra Libia, Estados Unidos y la OTAN implementaron una intervención militar fríamente calculada, sin usar tropas terrestres, basada en el uso masivo de la aviación y misiles de largo alcance. La entrega de armas a los rebeldes libios fue a cuentagotas y siempre con el objetivo de controlar a la dirigencia de las milicias. Al final, la renuencia de Gadafi para abandonar el poder, complicó los planes del imperialismo y radicalizó a los rebeldes. Ninguna fuerza quería negociar con el sanguinario gobierno de Gadafi.

En todas las revoluciones, la política del imperialismo siempre se reduce a un solo

punto: evitar la destrucción de las fuerzas armadas del viejo orden, pilar del Estado burgués. Al final, al fracasar una salida negociada, el ejército libio se derrumbó ante el avance militar de las milicias.

¿Cometerá el imperialismo los mismos errores que en Libia? Creemos que el imperialismo aprende rápido las lecciones, y que tratará de evitar a cualquier precio que la guerra civil en Siria termine como en Libia, con el triunfo total de las milicias.

(...)

12.- Inminentes ataques militares, Segunda Conferencia de Ginebra y Reunión del G-20.

Para este mes de Septiembre está programada la Segunda Conferencia Internacional sobre Siria, que se realizará en Ginebra, Suiza, en la que participaran, entre otros países, Rusia, China y Estados Unidos. De igual manera se realizará la Reunión del G-20 en Moscú, Rusia.

Todo parece indicar que los movimientos bélicos de la flota de Estados Unidos en el Mediterráneo, frente a las costas de Siria, y la amenaza de ataques militares puntuales por parte de Obama, forman parte de una estrategia que pretende obligar al régimen sirio a negociar y poner fin a la guerra civil, al mismo tiempo que la administración Obama teje una red de países amigos para impulsar la negociación en Siria.

Por ello, de cara a la Segunda Conferencia de Ginebra, y la Reunión del G-20, el imperialismo realizará, antes o después de las mismas, los ataques aéreos o de misiles, para imponer su política de negociación. La intensidad de los ataques, si llegan a realizarse, dependerán de la reacción de la resistencia que muestre el régimen de Bashar Al Assad y también de la posición o colaboración de Rusia y China.

(...)

14.- Pacifismo y guerra civil

Las amenazas de ataques militares contra posiciones del ejército sirio, han provocado manifestaciones pacifistas en Estados Unidos y algunos países europeos.

Toda movilización pacifista contra los inminentes ataques del imperialismo, es sumamente progresiva, de eso no hay duda. No obstante, estas manifestaciones contra el imperialismo, no deben interpretarse o transformarse en apoyo político al régimen dictatorial de Bashar Al Assad.

15. Debemos apoyar militar y materialmente al bando rebelde

En Siria, existen actualmente dos ejércitos o fuerzas militares que luchan a muerte por el poder. No hay campo intermedio o terreno neutral.

Por un lado está el ejército sirio, al servicio de la dinastía Assad, apoyado militarmente por Rusia y China, que oprime y masaca a la mayoría de la población. Este bando refleja las viejas y antidemocráticas estructuras de poder del Estado burgués en los últimos 40 años, no es revolucionario ni progresista, defiende el actual statu quo. Si tiene fuertes roces con el imperialismo norteamericano es porque se resiste a modificar las estructuras de poder que favorece a la minoría aluita. El imperialismo norteamericano y europeo presiona militarmente, no porque les interese la democracia en Siria, sino porque quieren detener la revolución democrática en curso, no quieren que Siria termine como Libia, con un triunfo militar de las milicias populares.

Por otro lado, está el bando rebelde, que refleja la insurrección de la mayoría de las masas populares contra las instituciones del Estado burgués. Dentro de este amplio bando rebelde existen distintas fuerzas de izquierda que luchan para derrocar al régimen de partido único. También, existen comités locales y milicias populares que combaten militarmente al ejército sirio y que se resisten a ser instrumentos de la política de negociación del imperialismo.

Este bando heterogéneo y plural refleja una genuina y auténtica revolución democrática, pero tiene una gran contradicción: la conducción de este bando está conformada por la oposición burguesa, vacilante, timorata, ahora domesticada por la política del imperialismo norteamericano. Esta es la dura realidad. Al no contar con una dirección revolucionaria, se han acrecentado los sufrimientos de las masas insurrectas. La política de la oposición burguesa y su colaboración con el imperialismo pone en peligro la lucha

democrática y el resultado de la guerra civil.

Las amenazas de inminentes ataques militares del imperialismo norteamericano no buscan que triunfe el ejército rebelde, sino presionar al ejército sirio para que detenga su avance militar, negocie y termine la guerra civil, liquidando la posibilidad de un triunfo militar de



los rebeldes, preservando intacta esa gigantesca maquinaria militar como es el ejército sirio.

En esas condiciones, impuestas por la dura realidad, los trabajadores de Centroamérica y del mundo tenemos que rechazar cualquier ataque militar del imperialismo, al mismo tiempo que rechazamos la política de Obama que consiste en evitar el triunfo militar de la revolución, salvando el régimen opresor, pero despidiendo únicamente a su cabeza visible: Bachar Al Assad.

Y la única manera de que triunfe el ejército rebelde, es apoyando militarmente la insurrección, independientemente de las profundas diferencias políticas con su actual conducción. Llamamos a los sindicatos, centrales obreras, partidos de izquierda y fuerzas democráticas y antimperialistas, a exigir a los respectivos gobiernos, sea Estados Unidos, las potencias europeas, los países árabes o cualquier país latinoamericano, que reconozcan a los grupos rebeldes de Siria como fuerzas beligerantes, con derecho a recibir armas, alimentos, medicinas y todo

lo necesario para evitar el sufrimiento de la población civil y garantizar el triunfo militar sobre la dictadura de Assad.

Confiamos que al calor del combate, surgirá una nueva dirección revolucionaria que orientara correctamente a las masas sirias en su lucha por la liberación nacional y social. Nuestro apoyo material y militar incidirá en el surgimiento de esa nueva dirección revolucionaria que tanto necesita la revolución siria.

Desde Centroamérica, zona donde hubo guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en nombre de los caídos en combate alertamos a nuestros hermanos de Siria y Medio Oriente de la engañosa política del imperialismo norteamericano, que hoy amenaza con atacar al régimen sirio pero que en el fondo anhela una negociación con el mismo, con el objetivo de abortar la revolución siria en curso.

De la misma manera que se requiera una amplia unidad de acción contra la dictadura de Bashar Al Assad, brindando apoyo material y militar a los rebeldes, para que triunfe la insurrección siria, también se requiere la más amplia unidad de las fuerzas antiimperialistas a nivel mundial para frenar los ataques del imperialismo, y evitar que el futuro de la revolución siria sea decidido en una mesa de negociación del imperialismo.

¡Alto a los ataques del imperialismo contra Siria!

¡Abajo la dictadura de Bashar Al Assad!

¡Por el apoyo material y militar a los rebeldes, por el triunfo militar de los rebeldes!

¡Que los grupos rebeldes sean reconocidos como fuerzas beligerantes, con derecho a recibir armas, municiones, medicinas y alimentos!

Centroamérica, 4 de Septiembre del 2013

Secretariado centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). ■

LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA EN LAS LUCHAS DE DESCOLONIZACIÓN

Por Juan del Llano

Con un territorio de 419.000 km² habitado en 1820 por 1.227.000 personas, hace 192 años que Centroamérica vivió el proceso de insumisión y rebeldías continentales para independizarse del decadente imperio español. Durante tres siglos sufrió la dominación militar, política y religiosa de la Capitanía General, la Audiencia y la Arquidiócesis de Guatemala, brazos autoritarios y expoliadores del Virreinato de la Nueva España.

Las provincias más pobladas eran Guatemala y El Salvador. Los habitantes de Nicaragua se concentraban en el área de los lagos y litoral del Pacífico. El este de Honduras era un espacio natural vacío y en el centro y el oeste habitaban dispersos algunos pueblos de indios. La mayoría de las gentes de Costa Rica vivían entre montañas, en el Valle Central. En 1800 el Virreinato de Nueva España perdió el territorio de Luisiana occidental que fue vendido por Napoleón I a Estados Unidos en 1803; y los gringos compraron La Florida a la corona española, en 1819.

De 103.000 personas inscritas en el censo de tributantes de 1778, casi el 70% eran indígenas guatemaltecos. En Costa Rica sólo el 1% eran contribuyentes. La población originaria era menor en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La fuerza de trabajo estaba compuesta por esclavos, indígenas sujetos a las encomiendas y a servía las familias aristócratas, la iglesia y los funcionarios militares y políticos. En menor grado, como jornaleros y trabajadores,

mestizos, mulatos y ladinos mal pagados con especies, fichas o monedas.

Las normas fiscales introducidas en 1747, ataron a los pueblos de indios a los intercambios mercantiles, y las ordenanzas reales de 1785 crearon las intendencias de Chiapas, Salvador, Honduras y Nicaragua -incluida Costa Rica-. La monarquía pretendía satisfacer los apetitos de tierras, riquezas y dinero de los hacendados, funcionarios, clérigos y comerciantes locales, en consonancia con los privilegios de las clases dominantes de Guatemala.

En adelante alcaldes, corregidores e intendentes, comerciantes, especuladores de tierras y el alto clero, aumentaron la explotación y el hostigamiento sobre los pueblos de

y el modo de vivir, y revivieron las disputas por el poder político: El carácter monopolítico mercantil de la economía, la poca diversidad de la agricultura de exportación afectada, además, por la revolución industrial de 1760-1815, las exacciones de los gobiernos y el clero, la ausencia de libertades para desarrollar otros cultivos, los asaltos y saqueos de los piratas ingleses y zambos mosquitos en el Atlántico, y el difícil acceso al comercio con Europa y América del Sur a través del mar oriental. Las zonas de agricultura más productiva estaban en las tierras del Pacífico.

El movimiento anticolonial

Las posiciones anticoloniales de fuerzas sociales diversas y heterogéneas emergen con claridad diez años antes de

la Independencia. En América del Sur, el proceso transcurrió con diferentes rasgos de lucha política entre 1810 y 1824. Las fuerzas populares irrumpen en los enfrentamientos militares a partir de 1812. Al principio, al lado de los monárquicos; después de 1814 alineadas en guerrillas

regionales con los bandos en pugna. En 1817 el general Bolívar logró unificarlas y encauzarlas a la guerra anticolonial continental, mediante la incorporación de reivindicaciones e intereses populares a los objetivos de descolonización. El proceso culminó con la derrota del General Morillo y la liberación de Venezuela.

Esos alineamientos de las fuerzas económicas y sociales dominantes durante la colonia, adobados con las intenciones de suprimir la esclavitud y de apaciguar con reformas la situación



indios. Entre 1805 y 1809 el 80% de los ingresos de la corona provenían de los estancos y alcabalas. Un siglo atrás, los tributos indígenas proveían ese mismo porcentaje. De ahí que al final del período colonial renacieron los motines de indios motivados por los abusos de los funcionarios de gobierno, la rigurosidad en los tributos y las arbitrariedades en las cobranzas.

Otros rasgos constriñeron el crecimiento económico, agudizaron los conflictos, sociales, acentuaron el desigual sistema de enriquecimiento

de los indígenas, las clases trabajadoras y otros estratos medios, se expresaron con altibajos y acentos discordantes en las contiendas militares desatadas en los virreinos de La Plata, Perú y Nueva España.

La guerra entre Francia y España de 1808-1814 y su desenlace en provecho de la burguesía liberal -manifiesto en las Cortes de Cádiz de 1810- abrieron entre las autoridades de los cabildos y de las audiencias de la Nueva España, el debate en torno a la titularidad de la soberanía ante la abdicación de Fernando VII. En México, las reformas de 1808 y el golpe reaccionario de 1809, propiciaron la rebelión del cura Miguel A. Rojas Hidalgo y Castilla, el 16 de setiembre de 1810. El acontecimiento abrió la fase de transición a la guerra civil, a las proclamas de independencia de España y a la constitución de la monarquía de Agustín de Iturbide.

Después que Fernando VII fue reinstalado en el trono monárquico, las situaciones conflictivas y los forcejeos por el poder entre élites civiles, militares y religiosas locales, o entre estas con la burguesía y la aristocracia metropolitanas, crearon un vacío de poder. La efervescencia social urbana se acentuó debido a la crisis de la producción y comercio del añil y el desempleo de los jornaleros salvadoreños y nicaragüenses. El paro forzoso desplazó a la población de los campos, a las villas y ciudades.

Entre 1811 y 1814 el descontento social tomó un alto potencial insurreccional. Los levantamientos, a veces sin relación con el ideario separatista, se acompañaron con reivindicaciones económicas, jurídicas y sociales de beneficio popular. Exigían la destitución de los funcionarios y fiscales corruptos y represivos; demandaban la supresión o reducción de las alcabalas y el papel sellado. Plantearon la abolición del tributo indígena, la repartición de tierras, libertad para cultivar y comercializar tabaco, cacao y azúcar, o la reducción de sus precios.

En la evolución de estas rebeldías, los sectores populares se comportaron en forma más radical. Trataron de ajusticiar a esbirros de la monarquía y a altos funcionarios. Al grito de "mueran

los chapetones", tomaron haciendas, saquearon tiendas, casas y almacenes, destruyeron garitas recaudadoras, hurtaron víveres, alimentos, ropas y herramientas de trabajo.

El quinquenio 1810-1815 fue el lapso de mayor violencia social, política y delictiva. Hubo cuatro enfrentamientos entre populares con las tropas de la monarquía. El primero en noviembre de 1811 en San Salvador, cuando se solicitó un obispado independiente de Guatemala. El segundo en diciembre de 1811 en Granada, debido al malestar por las ventajas políticas de León y la mala gestión del Intendente. La tercera de nuevo en San Salvador, en enero de 1814, inspirada por la insurrección de Morelos. La lucha más importante ocurrió en Guatemala en diciembre de 1813, organizada en los pasillos y la iglesia del convento de la orden de los Bethlemitas. Estos movimientos fueron disueltos y reprimidos en 1814 y 1815.

Pero lentamente fue configurándose una alianza de fuerzas revolucionarias entre los dirigentes de las familias criollas, los letrados pobres aspirantes a un empleo público y los miembros de las profesiones liberales a quienes se les negaba o regateaba el ejercicio profesional por razones de ideología política, a causa de sus lugares de nacimiento. Algunos pueblos de indios se sumaron a los rebeldes, recelosos o por medios coactivos.

En setiembre de 1820 las Cortes suprimieron los órdenes monásticos; restringieron la actividad de los mendicantes; prohibieron la propiedad a instituciones civiles y eclesiásticas; abolieron las exenciones de impuesto y otros privilegios de los obispos y sacerdotes, y el fuero militar para los oficiales de milicias. Tanto el clero como los soldados se enemistaron con el poder público por esas medidas liberales. El descontento amplió las simpatías por la alianza social que anhelaba y lideraba la independencia de Guatemala.

En 1820 entró de nuevo en vigencia la Constitución de Cádiz de 1812 y el clima legal propició la formación de facciones políticas. El grupo más intransigente lo formaba la oligarquía de hacendados y comerciantes exportadores, y elementos de clase media propagandistas de las

ideas monárquico constitucionales o representantes liberales de la burguesía europea y Estados Unidos. Los periódicos El Editor Constitucional dirigido por Pedro Molina, y El Amigo de la Patria, de tendencia más moderada, editado por José Cecilio del Valle, atizaron los debates en torno al libre comercio y el constitucionalismo republicano. También avivaron el regionalismo.

Guatemala fue epicentro de las confrontaciones y desenlaces. Las provincias de la periferia decidieron a tono con los sucesos que ocurrían en la Capitanía General y la sede del Virreinato. Las actas separatistas se proclamaron después que Yucatán declaró la independencia de España y reconoció el poder de Iturbide, en el Plan de Iguala, el 15 de setiembre de 1821. La separación se consumó en la Intendencia de El Salvador el 29 de setiembre; al día siguiente lo hizo la diputación de León, y en misma fecha, Nicaragua. Los cabildos de Costa Rica sesionaron aparte de los delegados de Nicaragua y el 1 de noviembre del mismo año depusieron al gobernador español. En Honduras, desde el principio Tegucigalpa se anexó a Guatemala y Comayagua al imperio mexicano.

BIBLIOGRAFIA

Dieterich Heins. Relaciones de producción en América Latina. Ediciones de Cultura Popular. Segunda edición. México 1985.

Cardoso F. S. Ciro y Héctor Pérez B. Centroamérica y la economía occidental (1520-1930). EUCR. San José, 1977.

Lindo Fuentes, Héctor. "Economía y Sociedad (1810-1870)". En: Historia General de Centroamérica. Tomo III. Flacso. CEE. Madrid. Pp. 141-202

Pinto Soria, Julio César. "La Independencia y la Federación". En: Historia General de Centroamérica. Tomo III. Flacso. CEE. Madrid. Pp. 75-140

<http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/57338>

<http://www.ihnca.edu.ni/files/doc/TallerHistoria10.pdf>

http://www.fmmeducacion.com.ar/BibliotecaDigital/Anna_MexicoyAmCentral.pdf

LA DEMOCRACIA DE LOS EMPRESARIOS

Por *Sebastián Chavarría Domínguez*

Los empresarios nicaragüenses viven momentos de euforia y felicidad. En relación al periodo de la guerra civil y la debacle económica, Nicaragua "progresa", la macroeconomía está estable, el gobierno sandinista aplica fielmente las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), no hay confiscaciones, los negocios andan bien y las grandes grupos de la oligarquía financiera están más contentos que nunca.

Evolución y características de la burguesía nicaragüense

Desde la época colonial, Nicaragua ha sido manejada por una oligarquía de reducidas familias que se han enfrentado a muerte por el control del aparato del Estado, la fuente de todos los privilegios y del enriquecimiento rápido.

Por ello, la oligarquía transformada ahora en burguesía nunca ha sido fuerte, ni sus diferentes fracciones han mantenido la continuidad en el poder, como ocurre en otros países. Ha ocurrido todo lo contrario: la continuidad en el poder y la estabilidad de las instituciones se ha roto con las guerras civiles entre los grupos de estas reducidas familias.

El país ha tenido escasos periodos de estabilidad económica y de "democracia". En el siglo XIX, el único periodo estable fue el de los 30 años conservadores (1858-1893), cuando Nicaragua era llamada la "suiza de Centroamérica". En el siglo XX, marcado por la intervención norteamericana y la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino, el periodo más estable económicamente fue el de la dictadura somocista, y con ello no

estamos embelleciendo al somocismo, solo registrando un hecho innegable.

La burguesía nicaragüense, dependiendo de quién controla el poder, ha crecido siempre bajo la sombra del Estado. En el siglo XIX, los gobiernos liberales y conservadores despojaron de sus tierras a las comunidades indígenas. En el siglo XX, el grupo de Somoza se mantuvo largo tiempo en el poder, enriqueciéndose con la corrupción, y sosteniendo pactos económicos con otras fracciones de la burguesía. El somocismo mantuvo durante 43 años el



Daniel Ortega, Jose Adan Aguerri, Carlos Pellas y Ramiro Ortiz

monopolio del poder, haciendo algunas concesiones políticas, y respetando los espacios económicos de la oposición conservadora, hasta la crisis de 1974.

Por eso las fracciones burguesas nunca tuvieron líderes políticos destacados, nunca educaron a sus dirigentes en la lucha política, parlamentaria, en la conquista de las masas o de los votos.

La democracia era formal, el régimen decidía todo y cuando había conflictos los resolvía en la mesa de negociación. Incluso, bajo el somocismo se llegó al extremo de institucionalizar la participación de la oposición conservadora en el parlamento y las instituciones del Estado, con cuotas fijas por encima de los resultados electorales. En la Constitución de 1950 la cuota era del 30% y en la de 1974 subió al 50%, pero este corporativismo de la dictadura, no logró frenar la revolución de 1979.

Los principales líderes obtenían y

consolidaban sus puestos demostrando quién negociaba mejor las cuotas de poder con el gobierno de turno. La democracia nunca fue bandera política, era utilizada solo en momentos álgidos, previos a la guerra civil. Cuando surgió el fenómeno populista de derecha liderado por el conservador Fernando Agüero, en los años 60, los grupos económicos de las familias Pellas y Chamorro presionaron por la componenda con el somocismo, lo que significó la ruina política de Agüero y del Partido Conservador.

Fue hasta 1974 que los empresarios, preocupados por la competencia desleal de Somoza, que los estaba desplazando de sus mercados tradicionales, comenzaron a exigir mayor democracia, pero la revolución de 1979 los revolcó, machacó, cambiando radicalmente la correlación de fuerzas. Una nueva y agresiva fuerza política y social, el sandinismo, emergió de la bonanza somocista (1945-1979), aplastando sus instituciones, confiscando sus bienes. De la guerra civil (1982-1990) y del posterior derrumbe de la revolución, emergió una nueva clase burguesa, ligada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La burguesía sandinista

La derrota electoral del FSLN en 1990 abrió las puertas para el retorno de la burguesía exiliada y confiscada, la cual efectivamente regresó al país, pero no logró recuperar el conjunto de sus propiedades. La sobrevivencia política del FSLN se explica por este fenómeno, por medio del cual los bienes confiscados permanecieron en manos de los nuevos dueños. La burguesía sandinista aceptó entregar el gobierno en 1990, a cambio de preservar la propiedad, especialmente en el sector agropecuario. Esto no fue un regalo sino que fue producto de una intensa lucha que hizo correr la sangre, pero la burguesía sandinista logró sobrevivir apoyándose en las masas, y también en instituciones como el Ejército y la Policía,

logrando fortalecerse bajo los 16 años de gobiernos neoliberales.

Los más importantes sectores de la burguesía confiscada, al no recuperar sus tierras, se concentraron en la creación de nuevos bancos privados, que producían más fácilmente ganancias, y desde ahí lograron absorber una importante cuota de la renta nacional, a costa de la ruina de miles de pequeños propietarios. El resultado de este relativamente corto proceso es que se reconfiguraron dos nuevos sectores de la burguesía: por un lado, la emergente burguesía sandinista, nuevamente en el poder, concentrada fundamentalmente en el sector agropecuario, y la oligarquía financiera conformada por el viejo Grupo Pellas (que se ha asociado al capital transnacional), el nuevo Grupo PROMERICA-BANPRO (este es el ejemplo clásico del nuevo sector emergente en el ámbito financiero), el nuevo Grupo LAFISE-BANCENTRO (con orígenes en el antiguo BANIC de la época de Somoza), el nuevo grupo de Piero Coen y otros grupos menores.

Cuarta Cumbre con empresarios

Contrario a todos los pronósticos, el retorno del FSLN al poder en el año 2007, no significó nuevas confiscaciones, ni un descalabro económico, sino las aplicaciones de rigurosos planes neoliberales decididos por el FMI. Este cambio no fue gratuito, tiene una sencilla explicación: la conducción actual del FSLN representa los intereses de la nueva burguesía sandinista, interesada en la buena marcha de los negocios.

Desde Enero del 2007, el presidente Daniel Ortega se reunió en el INCAE con los grandes grupos empresariales, para explicarles el contenido de la política económica de su gobierno. En marzo de 2010 Daniel Ortega volvió a reunirse con la cúpula empresarial nicaragüense. En Enero del 2011, después de su polémica reelección, se reunió en la llamada "Casa de los Pueblos" (antigua Casa Presidencial de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños), con los empresarios de las 19 cámaras empresariales que conforman el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), para sostener el rumbo económico.

Y el pasado 4 de septiembre se realizó la cuarta cumbre entre Daniel Ortega y los principales grupos económicos de Nicaragua. La tónica fue la misma de las anteriores: sonrisas, abrazos, buenas relaciones, discursos propositivos y declaraciones coincidentes a los medios de comunicación.

José Adán Aguirre, acaba de ser reelecto por séptima vez como presidente del COSEP, precisamente por impulsar una política de conciliación y negociación con el gobierno sandinista. El COSEP está conformado por 21 cámaras empresariales de pequeños y medianos empresarios. Los jefes de los grandes grupos económicos estuvieron presentes, pero ellos nunca se disciplinan a los resultados de las conflictivas asambleas, ellos siempre tienen una comunicación directa con el gobierno, están por encima del mismo COSEP.

Institucionalizar las reuniones

A partir del 2009, a pesar de los efectos de la crisis económica internacional, Nicaragua aumentó sus exportaciones en 80%, el empleo creció 35%, mientras el PIB se incrementaba en 4.7% durante los últimos 3 años, cuando el promedio de Centroamérica era de 3.28% en ese mismo lapso. Estas cifras se reflejan en las ganancias de los empresarios, por eso están muy contentos.

José Adán Aguirre, en sus declaraciones, reafirmó que "El trabajo que hemos hecho de consenso, producto de los 5 años de acuerdos salariales, las 68 leyes de consenso, los 39 esquemas de alianza público-privada que estamos desarrollando en este momento, los acuerdos comerciales que han abierto la posibilidad para que el sector productivo pueda encontrar nuevas oportunidades, han sido facilitadores para atraer esta inversión" (El 19 Digital, 5/9/2013).

Estos resultados de la llamada Comisión de Seguimiento, el gobierno de Daniel Ortega y los empresarios los quieren institucionalizar, proponiendo la aprobación de una ley en la que tenga que consultarse obligatoriamente a los empresarios.

El Presidente Daniel Ortega estuvo de acuerdo en la aprobación de esa ley:

"Creo que ese es un reto, un desafío, porque seríamos el primer país que estaría institucionalizando este modelo, dándole ya no la fuerza de la voluntad política de quien esté gobernando el que este modelo funcione o no funcione, sino que por ley se establezca en la Constitución de la República que este mecanismo, que este modelo sí funciona independientemente de quién esté en el gobierno de nuestro país" (El 19 Digital, 5/9/2013).

Lo anterior implica que las futuras reformas constitucionales institucionalizarán ese tipo de reuniones. Cualquier parecido con el modelo corporativista del somocismo es pura coincidencia.

Las declaraciones de Carlos Pellas

Carlos Pellas, quien en los años anteriores financiaba los partidos antisandinistas, se deshizo nuevamente en elogios a favor del modelo político del FSLN: "¿Qué si yo creo que hay una democracia? Bueno, hay unas elecciones, las elecciones determinan claramente quien es el ganador. Hasta la fecha se ha manejado de esa forma y yo creo que obviamente los nicaragüenses van a la votación y se elige el ganador. Los procesos siguen manteniéndose, por lo tanto yo considero que sí, que estamos viviendo en un país abierto (...) Aquí todo el mundo es libre de moverse, la prensa es libre de opinar y yo considero que desde ese punto de vista nosotros estamos viviendo en una sociedad abierta (...) Aquí hay un proceso donde se negocia la mayor parte del establecimiento de las leyes y se llega al consenso" (La Prensa, 5/9/2013).

Este espaldarazo al gobierno fue un puntapié en el trasero a los partidos de la oposición burguesa, que ya no reflejan los intereses de la burguesía que está contenta con el gobierno sandinista.

Esta euforia de los empresarios indica que los niveles de explotación y opresión de los trabajadores, se han multiplicado. De eso no cabe la menor duda. Si ellos están contentos, nosotros estamos mal, muy mal. ■

!NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!

Por Marcial Rivera

A partir del Consenso de Washington y de los Planes de Reajuste estructural impulsados por el FMI y el Banco Mundial en la década de los noventa, se planteaba la privatización de los servicios estatales como etapa necesaria para la modernización de Estado. En esta ola de privatizaciones impulsada por los gobiernos de derecha, tanto la Educación (en sus distintos niveles) como la Salud y el agua, no fueron objeto de privatización. No obstante en la actual coyuntura el fantasma de la privatización del agua aparece nuevamente.

Ley del Agua

Desde hace algunos años en El Salvador se viene planteando la posibilidad de tratar el tema del agua en relación a su protección, administración y distribución en una ley específica, siguiendo el ejemplo de algunos Estados Suramericanos que en sus legislaciones contemplan la protección y administración del agua o en otros términos, el monopolio del agua. Desde el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, en el que se buscaba regular el tema del agua, sin embargo el Sector Agrícola y el Foro del Agua -organización de la sociedad civil- también han presentado otras propuestas.

Actualmente en El Salvador la mayoría de hogares son abastecidas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA), entidad estatal que tiene como función principal la de abastecer a los distintos barrios y comunidades del vital líquido.

¿Por qué la ley?

No obstante, en algunos municipios del interior del país en los que ANANDA no tiene la posibilidad de administrar este líquido, el servicio lo brindan pequeñas

empresas privadas, que en ocasiones cobran cuotas leoninas y bastante altas, aunque también lo hacen algunas alcaldías. Frente a este proyecto de ley, la principal preocupación que manifestaba la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, es la relacionada con el control de los recursos hídricos, fundamentalmente en lo relacionado a la entidad que regularía el control del agua, si sigue siendo ANANDA, o si en ocasión de esta ley se creará una nueva entidad descentralizada.

Aunque también se reconocen otro

crearse una entidad descentralizada, distinta a ANANDA, esto porque como empresa estatal ha tenido enormes deficiencias en la parte operativa y administrativa, y en consecuencia mala prestación del servicio. Aunque es evidente que la aprobación de esta ley es de carácter urgente en función del inicio de su operativización. El problema de la mala gestión de ANANDA es que los trabajadores y los sindicatos no tienen injerencia en la administración de la institución. Al no haber control de los trabajadores, se desarrolla la ineficiencia y la corrupción



tipo de necesidades a este respecto. En este sentido se afirmaba que "Todos los diputados de todos los colores políticos coinciden en los principios básicos de la ley, entre otros: el derecho de acceso al agua potable; la imperiosa necesidad de mejorar el saneamiento (los vertidos) y el deber estratégico de manejar un recurso que, año tras año, disminuye en cantidad y en calidad". (EDH, 26-08-2013).

En este panorama, el FMLN se ha opuesto a la creación de una entidad descentralizada, mientras que los partidos de derecha han afirmado que una entidad distinta es la que debe regular la administración del agua. Irónicamente FUSADES ha manifestado que el tema del agua debe ser manejado por una sola entidad estatal. Por otro lado, la Mesa del Agua considera que sí debe

¿Qué debe hacerse?

El 22 de agosto las calles de San Salvador fueron testigos de la manifestación realizada exigiendo que se detenga el abuso en el cobro excesivo de los servicios de agua, así como la no privatización de este recurso ni de su administración. Este ha sido el punto de fricción: la participación del sector privado en el tema de la distribución del agua, pues no puede dejarse de lado que con la ley de socios público-privada, hay un camino que eventualmente podría conducir a la privatización del mismo.

Es necesaria entonces fortalecer el rol estatal de ANANDA, en cuanto a su administración, distribución y evaluación. Esta entidad debe emanar esencialmente desde el Estado, gozando de autonomía y descentralización; en ella estará controlado el 100% del monopolio del tema del agua -eventualmente las alcaldías podrían participar en la parte operativa- de manera que la participación privada debe quedar descartada en su totalidad.

Es esencial que esta entidad incluya la representación de asociaciones de pobladores, sindicatos y asociaciones campesinas y populares, que fiscalicen y garanticen su funcionamiento transparente. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamará a la movilización popular ante cualquier intento de privatización de este vital líquido. ■

CENTRALES SINDICALES CLAUDICAN A LA BURGUESÍA

Por Diego Lynch

La firma de los acuerdos y el consenso al que han llegado tanto el Gobierno Central como la Empresa Privada y los supuestos representantes de los trabajadores en relación al incremento del salario mínimo, ha sido una muestra más de la claudicación y servilismo que estos sindicatos blancos y el Frente Sandinista tiene hacia la burguesía y las políticas capitalistas que han venido implementando en el país, las que pretender ocultar detrás de discursos populistas a favor de los pobres, de los obreros y la clase trabajadora.

Durante los últimos años se ha impuesto la voluntad de los grandes empresarios, y tanto el gobierno como los sindicatos terminan negociando el salario y el hambre de los trabajadores, permitiendo aumentos de salario paupérrimos que no ayudan en nada a la economía familiar de los nicaragüenses.

¿Salario Mínimo Trianual?

Adán Aguerrí, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), señala que existe un lento crecimiento en la economía mundial, y que la caída de los precios internacionales de los productos (café, oro, azúcar, entre otros), obliga a que la discusión del aumento al salario mínimo se haga cada tres años y no cada seis meses a como lo establece la constitución política de Nicaragua, esto con el fin de que el país sea más productivo y competitivo (El Nuevo Diario; 22 de Agosto del 2013).

Las dos caras de los Sindicatos

Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, dijo en conferencia de prensa que todo el gremio está en contra de la propuesta de revisar de forma trianual el salario mínimo. De igual forma Luis Barbosa, representante de la central sindical "José Benito Escobar" y Nilo Salazar, representante de la

Confederación General de Trabajadores Independientes, CGTI, aseguraron que bajo ninguna circunstancia aceptarían la propuesta realizada por el COSEP.

"El salario mínimo deja mucho qué desear en este país, y si van a condenarlo por dos o tres años como tienen las intenciones de hacerlo, en primer lugar, habría que preguntarles quién nos asegura a nosotros que el alto costo de la



Roberto González, dirigente de la CST, aceptó la propuesta de discutir el salario cada 3 años

vida se detiene, quién detiene el precio de los medicamentos, quién detiene las políticas de impuestos". (El Nuevo Diario; 24 de Agosto del 2013).

Casi quince días después de haber brindado estas declaraciones, las centrales sindicales han cambiado su discurso demagógico, y una vez más le claudican a la burguesía y a los grandes empresarios, expresando que no es del todo mala la propuesta del COSEP.

Tanto la Central Sandinista de Trabajadores (CST) como la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), han expresado que se apoyaría dicha propuesta, ya que las condiciones macroeconómicas son preocupantes, porque los precios de los

productos exportables están cayendo (Declaraciones brindadas por Roberto González en rueda de prensa).

Dentro de las condiciones que pretenden presentar al COSEP para aprobar dicha propuesta establecen que los precios de los alimentos percederos no presenten grandes aumentos, incrementar el porcentaje de aporte al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), y que los ajustes al salario mínimo para los próximos tres años sean del 11, 12 y 13 por ciento respectivamente (La Prensa; 6 de Septiembre del 2013).

Aumento de salarios conforme la carestía de la vida

Ante esta claudicación por parte de las centrales sindicales oficialistas y afines al Frente Sandinista, el Partido Socialista Centroamericano hace una denuncia pública ante la clase obrera y trabajadora; exijamos a estos dirigentes sindicales que se retracten y que rechacen cualquier intento de reformar el periodo de negociación del salario mínimo.

Bajo ninguna circunstancia podemos negociar los salarios y el hambre de nuestro pueblo, no es posible realizar una negociación trianual ya que el deslizamiento de la moneda se mantiene en un cambio constante, esto llevaría a la miseria y al hambre a la clase económicamente más baja de Nicaragua. Tampoco podemos congelar los precios de los productos percederos ya que esto significaría llevar a la quiebra a los pequeños productores.

Para estabilizar la economía hay que generar más empleos y pagar mejores salarios, esto crearía una circulación de dinero que ayudaría a estabilizar la economía del país. No podemos claudicar a las políticas burguesas de los empresarios y del imperialismo, no podemos negociar el salario y el hambre de los trabajadores.

¡Por un salario mínimo justo y equitativo, que se dolaricen los salarios y que se discutan cada vez que suba el costo de la vida! ■

HACIA UNA RADICALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL MAGISTERIO

Por Armando Tezucún

Durante la última semana de agosto los maestros trabajadores del Ministerio de Educación tomaron las calles de la ciudad capital en dos ocasiones. En la edición anterior de El Socialista Centroamericano hicimos comentarios sobre la polémica entre la dirigencia del sindicato magisterial más grande (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala – STEG) y nuevos grupos sindicales del magisterio que adversan su política colaboracionista y oportunista. Ambas corrientes salieron a manifestar en diferentes días de la mencionada semana.

El miércoles 28 unos 10 mil maestros (según cálculos de la prensa escrita) de la capital y del interior pertenecientes al STEG marcharon exigiendo un incremento del gasto en educación presupuestado para el próximo año, para que alcance los Q 15 mil millones (este año es de Q 13 mil millones); los docentes denunciaron atrasos en los programas de alimentación y refacción escolar; demandaron el cumplimiento del pacto colectivo y que se agilice la creación de plazas para maestros en el interior del país; además rechazaron el incremento de los precios de la canasta básica.

El secretario del STEG, Joviel Acevedo, había anunciado que reuniría a 30,000 docentes, lo cual no sucedió. La movilización siguió la pauta de otras realizadas por el STEG durante el actual gobierno, una demostración de fuerza para presionar suavemente, un recordatorio amistoso al gobierno, para que asuma los compromisos firmados. Así hay que entender las amenazas de paro de Acevedo, "Si el próximo año no se cumple al cien por ciento, no vamos a empezar el ciclo lectivo" (El Periódico 28/08/13). Esta bravuconada se reveló como pura demagogia cuando el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti salieron

bajo la lluvia a saludar a la marcha en las afueras de Casa Presidencial, como viejos amigos. Antes, la manifestación se había detenido en el Ministerio de Educación, donde fueron recibidos por uno de los viceministros y en el Congreso de la República, donde los atendieron

fraudulentamente sin su consentimiento. Inicialmente se encaminaron a la sede del sindicato para presentar sus cartas de renuncia, pero estaba cerrada; luego se dirigieron al Congreso de la República y al Ministerio del Trabajo.

La prensa burguesa, con su sensacionalismo habitual, hace énfasis solamente en la aversión al STEG y la división en el magisterio, buscando en el fondo desprestigiar a los sindicatos. Lo que no menciona en relación a la CMR es su política de enfrentar al gobierno en los temas candentes de la educación: rechazo al Acuerdo 1505 2013, que impone la represión contra los estudiantes en los institutos públicos; su rechazo a la reforma de la carrera magisterial; su reclamos sobre las condiciones de contratación de los maestros.



Marcha de la Coordinadora Magisterial en Resistencia

diputados de la Junta Directiva; en ambas instituciones los dirigentes del STEG entregaron sus peticiones.

Con esta movilización Acevedo quiso también hacer un alarde de fuerza ante las nuevas corrientes sindicales que se están nutriendo con el creciente rechazo de los maestros al STEG. Ante los medios dio variadas declaraciones en ese sentido: "Les vamos a demostrar que con ellos o sin ellos el STEG y la Asamblea Nacional del Magisterio son lo mismo o mejor"... "El sindicato no tiene necesidad de más gente, el que no quiera ser del STEG que no lo sea"... "ellos pueden organizarse como quieran" (El Periódico 28/08/13).

Estas nuevas corrientes, organizadas ahora en la Coordinadora Magisterial en Resistencia (CMR), se movilizaron el viernes 30. Unos dos mil docentes procedentes de varios departamentos marcharon para expresar su rechazo a Joviel Acevedo y su intención de renunciar al STEG, al que fueron afiliados

Creemos que el amplio movimiento de desafiliación al STEG no es reflejo de apatía y rechazo al sindicalismo en los compañeros maestros, sino que significa el rechazo a la línea de colaboración con el gobierno de Acevedo y su camarilla; es un síntoma de que sectores de vanguardia están ganando influencia en el movimiento magisterial. Esta influencia se debe manifestar: a) en el fortalecimiento de una organización que coordine a la gran cantidad de pequeños sindicatos que proliferan en el interior; b) en el cuestionamiento de Acevedo y sus secuaces al interior del mismo STEG, apelando a las bases para sacarlos de la dirigencia; c) en la formulación de un programa de lucha consecuente y combativo que enfrente las problemáticas urgentes de la educación en Guatemala y se vincule solidariamente con las luchas de los campesinos, indígenas, estudiantes y el resto de trabajadores del país. ■